



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Apelación de Auto: 05001 43 03 010 2022 00270 01

Proceso: Ejecutivo acumulado al 05001 40 03 001 2018 01142 00.
Demandantes: BANCO DAVIVIENDA S.A.¹ e INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. –IMSA S.A.- (en acumulación).
Demandados: OLEGARIO DE JESÚS LONDOÑO (C.C. 71´701.470) y otro.
Extracto: El instrumento en cobro no puede tenerse como título complejo, aunado que en principio se satisfacen los requerimientos para proferir orden ejecutiva. Los aspectos vinculados al negocio causal han de ser debatidos en el decurso procesal. Revoca.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por IMSA S.A., contra el auto calendado el veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín.

ANTECEDENTES

Demanda principal y pedido de acumulación:

¹ El Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG S.A.) se subrogó parcialmente pagando al demandante primigenio \$42´567.354.00; posteriormente, el 21 de mayo de 2.020 aquel vendió la obligación a la Central de Inversiones S.A. (CISA S.A.). Folios 138-139 archivo 01, y archivos 02 y 04, todos en el Expediente 2018 01142.

El BANCO DAVIVIENDA S.A. demandó ejecutivamente a OLEGARIO DE JESÚS LONDOÑO, en nombre propio y como representante legal de DISTRIRUEDAS LG S.A.S. (hoy en liquidación), cobrándoles el pagaré 781972 por valor de \$85'134.000.00, más intereses. El 18 de diciembre de 2.018 se libró orden de pago²

En tal asunto se decretaron cautelas y se citaron los acreedores con garantía real, para el 3 de septiembre de 2.021 ordenarse seguir adelante la ejecución, pasando el asunto a Ejecución, correspondiéndole inicialmente al Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución Medellín, en el que IMSA S.A. como acreedora hipotecaria presentó demanda ejecutiva³, pretendiendo la acumulación en los términos del artículo 462 Procesal Civil.

Para lo anterior expuso que en 2.018 debido a relaciones comerciales, suscribió un acuerdo de pago con LONDOÑO quien actuó en nombre propio y como representante legal de DISTRIRUEDAS LG S.A.S. (hoy en liquidación), lo que se garantizó con hipoteca de los inmuebles con matrículas 001-1085338 y 001- 1085325, al paso que se firmó el *"PAGARE IMSA201801"*, mismo que pretende ejecutar, por lo que deprecó librar orden de pago por \$362'854.035.00 de capital, además por \$43'000.000.00, por los réditos de plazo generados entre el 12 de julio de 2.018 al 12 de enero de 2.022, además intereses de mora.

El Juzgado del nivel Municipal por auto del 13 de septiembre de 2.022, se declaró incompetente⁴ exponiendo que el asunto es competencia de Juez con superior categoría, al que le remitió el expediente para que continúe con el asunto; y como las pretensiones acumuladas son de mayor cuantía, el asunto es del resorte de los Jueces Civiles del Circuito, a donde ordenó enviar la acción principal y la acumulada.

² Folios 1-5, 41-42 archivo 01 del expediente 2018 01142.

³ Archivo 01 expediente 2022 00270

⁴ Archivo 02 expediente 2022 00270

De la providencia recurrida:

El *a quo* mediante el proveído hoy recurrido⁵, señaló que los documentos en cobro (pagare y acuerdo de pago), refieren a obligaciones mutuas, y como no se demostró el cumplimiento, es ausente la claridad, elemento esencial para la ejecución que en acumulación se pretende.

Al respecto IMSA S.A. presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación⁶, explicando que el “*ACUERDO DE PAGO*” se anexó como prueba del contexto de los hechos, pero no como documento base de ejecución, y que el título valor (pagaré en cobro), fue diligenciado según la respectiva carta de instrucciones, por lo que cumple las exigencias del artículo 422 del C. G. del P.; agregando que la providencia que negó el mandamiento ejecutivo, nada dijo sobre el título valor y su carta de instrucciones, o si es que ésta faltó. En todo caso, dijo adjuntar de nuevo el “*PAGARE IMSA201801*” y su carta de instrucciones. De esa manera, insistió en sus pedidos ejecutivos.

En providencia del 25 de agosto de 2.023 se resolvió no reponer, pues echando de menos otros documentos relacionados con el “*acuerdo de pago*”, dijo que lo presentado para la ejecución “*no alcanza la denominación de título ejecutivo perfecto*”. En subsidio concedió la alzada.

En esos términos, nos pronunciamos de plano, tal como lo prevé el artículo 326 del C. G. del P., previas:

⁵ Ver Archivo 05 expediente 2022 00270

⁶ Archivo 06 de igual expediente (2022 00270).

CONSIDERACIONES

Del artículo 320 procesal civil se tiene que el recurso de apelación tiene como objetivo que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, dentro del principio de la limitación que impone dicha norma y el artículo 328 ibídem.

La alzada de la actora en acumulación está relacionada con la negación de la orden de pago reclamada, tema que es apelable según el artículo 321.4 del C. G. del P., por lo que el problema jurídico a resolver consistente en dilucidar si lo aportado como título base de recaudo, reúne los requisitos para proferir mandamiento ejecutivo.

Del C. de Co. se tiene que el pagaré debe contener unos requisitos generales (artículo 621) y otros específicos (artículo 709), todos necesarios para que se pueda ejercitar la acción cambiaria a través del procedimiento ejecutivo (artículos 780, 781 y 793 ídem); mientras que el artículo 422 del C. G. del P., señala que pueden demandarse las obligaciones claras, expresas y exigibles, que sean vinculantes respecto a quien se demanda, exigencias de las que doctrina ha dicho:

“Respecto a los requisitos que deben cumplirse para demandar ejecutivamente el pago de una obligación, el artículo 422 del Código General del Proceso contempla que *«[p]ueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles **que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, (...) y los demás documentos que señale la ley (...)**»* (negrillas propias). Sobre ellos, la Corte ha dicho:

*“La claridad de la obligación, consiste en que **el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.***

*“La expresividad, como característica adicional, significa que la **obligación debe ser explícita**, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. **Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.**”* Subraya, negrilla y cursiva en el texto. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia STC3298-2019, reiterada en la STC13670-2022.

Así mismo, el título ejecutivo puede ser singular, es decir, estar contenido en un solo documento; o complejo, o sea, cuando la obligación está incluida en varios de ellos.

En las presentes IMSA S.A. pretende cobrar el “*PAGARE IMSA201801*”, el cual adjuntó con su respectiva carta de instrucciones (denominada “*autorización para llenar espacios en blanco del pagaré no imsa201801*”), ambos suscritos por OLEGARIO DE JESÚS LONDOÑO en nombre propio y como representante legal de DISTRIRUEDAS LG S.A.S.; indicándose desde la demanda de acumulación y reiterándose en el recurso contra el auto que negó la orden ejecutiva, que lo pretendido está incorporado en tal instrumento⁷.

Bajo tal circunstancia, es decir, sobre el “*PAGARE IMSA201801*”, era que debía circunscribirse el estudio para proferir la orden de apremio, donde a tal altura resultaba exótico analizar el negocio causal junto con anexos inherentes a lo mismo.

⁷ La pretensión principal se presentó así:

I.- Sírvase señor Juez, librar Mandamiento Ejecutivo en favor del “INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A.” y en contra de la sociedad “DISTRIRUEDAS LG. S.A.S., hoy en LIQUIDACION, sociedad con domicilio en Medellín, constituida por escritura pública No. 2929, otorgada en la notaría 18 de Medellín, en noviembre 11 de 2005 Registrada en la Cámara de Comercio de Medellín en noviembre 23 de 2005, en el libro 9, bajo el número 11896, con NIT 900.056.287-2, representada legalmente por su liquidador OLEGARIO DE JESÚS LONDOÑO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 71.701.470, o por quién haga sus veces al momento de la notificación de la demanda y contra el señor OLEGARIO DE JESUS LONDOÑO, quien se encuentra domiciliado en Medellín, y se identifica con la cédula de ciudadanía N° 71.701.470; por las siguientes sumas de dinero consignadas en el PAGARE No. IMSA201801:

Entonces, si el instrumento en cobro, *prima facie*, cumple con los requisitos, y sin que se advirtiera que se esté ante un título complejo⁸, el estudio para dispensar el mandamiento de pago debió circunscribirse al pagaré de marras (*IMSA201801*), instrumento que en principio satisface los requisitos generales de los títulos valores, tales como son “*La mención del derecho que en el título se incorpora*” y “*La firma de quién lo crea*”, así como los específicos consistentes en “*El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago*”, “*La indicación de ser pagadero a la orden o al portador*”, “*La forma de vencimiento.*”; y, “*La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero*”.

Claro está, que no se está negando o desconociendo la existencia de situaciones que justamente, y aún es un albur, podrán alegarse y probarse en el curso del proceso y que derivan de un negocio previo o causal, pues si bien el título valor se desprende de la obligación que lo originó, no desaparece el negocio jurídico subyacente (art. 784.12 C. de Co.), pero ello a esta altura procesal no está en debate; sino, se insiste, lo que debe estudiarse es el pagaré en sí mismo considerado, para que dentro de la autonomía jurisdiccional que corresponda proferir o negar el mandamiento ejecutivo reclamado.

En tales términos, se revocará la decisión atacada, para que el juzgador de conocimiento realice el estudio que corresponda al pagaré que para su cobro se le ha presentado, sin que pueda negar el mandamiento por las circunstancias aquí debatidas.

⁸ Del título complejo, la doctrina ha expresado: “...*En efecto, se entiende por éste, aquél cuya obligación está contenida en varios documentos “... que demuestran la existencia de una obligación.” Así, resulta más clara la anterior conclusión, por cuanto, cuando de la suma de todos los documentos se obtiene la certeza del cumplimiento de los requisitos o condiciones expresados, sin que cada uno en particular tenga que cumplir con la totalidad de los mismos (...)*”. Corte Constitucional Sentencia T-474/18; y, “... *hoy es comúnmente admitido que la unidad del título complejo no consiste en que la obligación clara, expresa y exigible conste en un único documento, sino que se acepta que dicho título puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligación que se reviste de esas características. Así pues, la unidad del referido título es jurídica, mas no física*”. STC18085-2017 citando la STC11406-2015. Sala Civil, Corte Suprema de Justicia.

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto del veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín, tal como se expuso.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo y de la autonomía jurisdiccional, pero sin que se pueda negar el mandamiento de pago por las circunstancias aquí estudiadas. Sin costas.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', written in a cursive style.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO